

RUMANÍA

COMENTARIO GENERAL

El mes de octubre del 2009 ha visto deshacerse la coalición política surgida hace menos de un año tras las últimas elecciones legislativas generales. Dicha coalición, formada por los dos partidos mayoritarios, PDL y PSD, con casi todas las características de un Gobierno de concentración (tan solo tenía enfrente la débil oposición del minoritario PNL junto con la discreta abstención del Partido de la Minoría Húngara) se encontraba más y más amenazada conforme se aproximaba la fecha de las elecciones a la Presidencia de Rumanía, que se espera que se celebren durante los meses de noviembre y diciembre.

La ruptura de la coalición ha desatado además una crisis política sin precedentes en los veinte años de vida democrática de Rumanía, con la reiterada negativa del Presidente Basescu en aceptar al candidato a Primer Ministro apoyada por la mayoría parlamentaria y el rechazo de ésta a cualquier otro candidato que no sea el independiente Klaus Iohannis, actual alcalde de Sibiu. La consecuencia es que se mantiene en el poder el Gobierno de Emil Boc (PDL) aunque tras no poder superar la moción de censura presentada en el Parlamento, se encuentre disminuido en sus prerrogativas como mero gobierno en funciones.

La ruptura de la coalición se ha producido, además, en un momento muy crítico, en el que el Gobierno debía ultimar las reformas legislativas comprometidas con el FMI, Banco Europeo de Desarrollo Regional y Banco Mundial al negociar un préstamo de casi 20 mil millones de euros con dichas instituciones. De hecho, la tercera entrega del préstamo, por valor de unos 3.500 millones de euros, que debía llevarse a cabo en diciembre ha sido aplazada tras la visita de la Delegación del FMI a Bucarest al no poder cumplir el Gobierno rumano las condiciones mínimas que se le requerían, a saber, la aprobación del Presupuesto para el 2010 con un déficit máximo de un 5,9% del PIB y la adopción de medidas que garanticen que no se supera dicho margen, consistentes básicamente en la promulgación de un paquete de medidas legislativas destinadas a limitar el gasto público. Como el actual Gobierno en funciones no tiene competencias para seguir adelante con dicho paquete y tampoco para proponer un proyecto de presupuesto, todo parece indicar que habrá que esperar hasta después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el próximo 6 de diciembre, para saber quien tiene el respaldo de la ciudadanía y, por tanto, derecho a formar gobierno.

El problema más grave es que el Estado necesita unos 5 mil millones de euros hasta final de año para hacer frente a sus obligaciones, según declaraciones recientes de Adrian Vasilescu, consejero del Gobernador del Banco Nacional, y que entre estas obligaciones se encuentra sin la menor duda el pago de salarios y pensiones del Sector Público. Aunque el Presidente Basescu ha garantizado el pago de todas estas obligaciones, afirmando que si el FMI no desembolsa finalmente las cantidades comprometidas se pueden tomar otras medidas (incluida la de recurrir al empréstito privado) no hay que olvidar que esto lo ha dicho en plena campaña electoral, y que este país guarda amarga memoria de la futilidad de las promesas electorales de sus líderes políticos.

A punto de cumplirse el 20 aniversario de la revolución que derribó a Ceaucescu y abrió para Rumanía el camino de la Democracia y de la convergencia con occidente, el país se encuentra en uno de los momentos más críticos de su Historia reciente. Para ilustrar cómo ha podido llegarse a esta situación, que ha desembocado en una crisis que ha visto su momento más álgido durante este mes de octubre, daremos a continuación unas breves pinceladas.

Andadura y evolución del Gobierno de Coalición PDL-PSD.

Las elecciones generales de finales del 2008 se saldaron con un empate técnico entre las dos formaciones más importantes, el PDL (partido de centro-derecha que lidera el Presidente de Rumanía) y el PSD (partido social demócrata en la oposición desde diciembre del 2004).

Coincidiendo con la víspera de la entrada de Rumanía en recesión económica, los líderes de ambos partidos decidieron formar una coalición que les garantizara el 80% de los votos del Parlamento y les colocara en las mejores condiciones para hacer frente a la crisis. Fruto de esta situación fue la aprobación de un Presupuesto con objetivos de crecimiento de un 2,5% y un déficit de un 2% que casi inmediatamente se revelaron irrealizables.

Con una crecida deuda externa privada que amenazaba con provocar un caos económico si se mantenía la tendencia de desplome de la moneda local, la medida casi inmediata fue la de iniciar negociaciones con el FMI para obtener un préstamo que permitiera a Rumanía mantener la estabilidad económica y financiera, y que finalmente se cifró en casi 20 mil millones de euros. Dicho préstamo, acordado en el mes de marzo, llevaba aparejada la exigencia de una contención del déficit público hasta un máximo de un 4,5% y la ejecución de una profunda reforma de la estructura del Sector público que la garantizara a corto y medio plazo. Congelación salarial, disminución del tamaño del sector público y moderación del crecimiento de las pensiones (debido a la gran presión de estos gastos sobre el presupuesto) son las principales medidas a que se comprometió el Gobierno de coalición PDL-PSD con las entidades financieras internacionales..

El Gobierno de Emil Boc se puso inmediatamente manos a la obra y preparó un paquete legislativo consistente en varios proyectos sobre reestructuración de las retribuciones de los empleados públicos, otro específico sobre el Sector educativo, reestructuración de las agencias gubernamentales y finalmente una nueva Ley sobre las pensiones públicas. La mayoría parlamentaria de que gozaba el Gobierno le permitía, además, aprobar estos proyectos por medio de ordenanzas de urgencia a convalidar "a posteriori" por el Legislativo, abreviando así al máximo el trámite parlamentario.

A partir de entonces, Rumanía ha vivido un rápido deterioro de su economía. La rápida caída del consumo, de la producción y de los ingresos del Estado, por una parte, y el crecimiento de la inflación, del desempleo y de la inestabilidad social, por otra, unido al incremento de la previsión de crecimiento negativo hasta una cifra superior al 7%, llevó a que durante la primera visita de comprobación del FMI en el mes de agosto, el gobierno rumano obtuviese una revisión de las condiciones, aceptándose un incremento del margen del déficit público

hasta un 7,2% para el 2009 y un 5,9% para el 2010. Asimismo, se aceptó que el importe del préstamo, inicialmente destinado en exclusiva a inversiones y a contener la caída de la moneda local, se destinase parcialmente a financiar el déficit, lo que equivale a decir que se podría utilizar para el pago de los salarios y pensiones del Sector público. La baja tasa de absorción de Rumanía de los fondos europeos (un 4,7% en el mes de junio) convirtiendo al país en la práctica en contribuyente neto, era un dato que no hacía sino agravar el panorama económico.

Desde el punto de vista político, esta situación no había dejado de provocar tensiones en el seno de la coalición. En el reparto de carteras ministeriales llevado a cabo durante la negociación inicial para formar la coalición de gobierno, el PSD, fiel a la lógica de los partidos social-demócratas, se atribuyó la responsabilidad del Diálogo Social y se reservó los departamentos más “sociales”, como los de Trabajo, Sanidad y Educación, además de otros más estratégicos, como el de Exteriores y el de Interior. Si la atribución de los primeros le ocasionó un deterioro de imagen ante los interlocutores sociales y ante la opinión pública en general, al tener que asumir la responsabilidad de debatir y poner en práctica las impopulares medidas de austeridad, la atribución de los segundos le acabaría enfrentando abiertamente (sobre todo a causa del Ministerio de Interior) con su socio de coalición.

Los rumores de manipulación de las elecciones presidenciales como catalizador de la crisis política.

A partir de la segunda mitad del año, todos los analistas coincidían en resaltar que la cercanía de las elecciones a la Presidencia de Rumanía estaba poniendo a prueba la solidez e incluso la viabilidad del proyecto de coalición de gobierno. El punto de fricción se constituyó en la disputa por parte del PDL sobre la cartera de Interior, lo que ya pudo constatarse antes incluso del mes de septiembre, en que los medios recogieron declaraciones de altos responsables del PDL manifestando su interés en recuperar el control de este Ministerio. El motivo no es otro que la importancia que se atribuye al mismo en la preparación de las elecciones.

Pero, ¿es cierto que el control del Ministerio del Interior puede otorgar una ventaja decisiva en el resultado electoral?

Las características del sistema electoral en Rumanía dan pábulo a toda clase de especulaciones que se han venido reflejando en los medios de comunicación durante los últimos meses. Se ha hablado ampliamente de “turismo electoral”, de la dificultad en comprobar que las mismas personas puedan votar varias veces, de la compra – venta de votos y en la dificultad de impedir la manipulación de los resultados desde el mismo momento del recuento en las mesas electorales.

Para empezar, al contrario de lo que ocurre en la mayoría de los países occidentales, cada votante no tiene asignado un único colegio electoral propio, sino que puede ejercer su derecho en cualquiera de los colegios existentes. Esto ha sido visto por algunos comentaristas como una tentación para que se pueda organizar autobuses de votantes visitando sucesivos colegios electorales. El diario “Jurnalul Nacional” publicó a mediados de septiembre un reportaje en el que afirmaba que la propia ubicación de los colegios electorales, creada por

una ordenanza de urgencia, lejos de los lugares más concurridos por el público y más difícilmente controlables por los medios de comunicación, estaba pensada para favorecer el fraude masivo. Este Diario calculaba que los colegios electorales creados por dicha ordenanza podrían ser visitados por 7 u 8 mil autobuses y minibuses de transporte de turistas electorales, que podrían contabilizar hasta 3,5 o 4 millones de votos ilegales.

Por otra parte, el Presidente Basescu ha tomado la iniciativa de convocar un referéndum proponiendo la reforma de la estructura del Parlamento, en la que se reduciría a una las dos cámaras actuales y también el número de parlamentarios, consulta que se realizará simultáneamente con la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Esto ha llevado a cuatro importantes ONG a solicitar al Defensor del Pueblo que se dirija al Tribunal Constitucional para que éste declare ilegal la simultaneidad de las dos consultas, habida cuenta de la propaganda adicional que ello proporcionaría al actual Presidente (que aparecería en dos carteles simultáneos, el de candidato a las elecciones y el de promotor del referéndum) y del hecho del incremento de riesgo de fraude que provocaría la verificación simultánea de los resultados de ambas consultas.

Sea todo esto cierto, o no, todo parece apuntar a que en las actuales circunstancias, el control del aparato electoral y su organización no carece de importancia.

Lo que sí es rigurosamente cierto es que el detonante de la crisis política fueron las declaraciones que el Vicepresidente del Gobierno y Ministro del Interior, Dan Nica, del PSD, efectuó en los últimos días del mes de septiembre, comentando precisamente la posibilidad de fraude en las elecciones presidenciales. Inmediatamente, el Premier Emil Boc propuso la destitución del Ministro, que poco después fue decretada por el Presidente Basescu. A partir de ese momento, los acontecimientos se produjeron a ritmo vertiginoso. A la retirada en bloque del Gobierno de todos los ministros del PSD, en protesta por la destitución de Nica, siguió la constitución de una nueva mayoría parlamentaria por la formación social-demócrata ahora en la oposición, el PNL y el Partido de la Minoría Húngara, que inmediatamente planteó una moción de censura contra el gobierno supérstite del PDL. La moción fue aprobada por la nueva mayoría, quien a continuación propuso al Presidente Basescu el nombramiento como primer ministro del actual Alcalde independiente de Sibiu, K. Iohannis.. Esta posibilidad fue descartada por el Presidente, que encargó gobierno a Lucian Croitoru, antiguo representante de Rumanía ante el FMI y próximo a su partido. La nueva mayoría parlamentaria se negó a su vez a aprobar la investidura de Croitoru y siguió apoyando a Ihoannis.

Perspectivas de solución de la crisis

El Presidente ha dejado bien claro que nunca encargará a Ihoannis la formación de Gobierno, ya que le considera una marioneta en manos de los partidos de la oposición. Por otro lado, sabe que ningún otro candidato propuesto por él será finalmente investido por el Parlamento. Pero parece tener la intención de prolongar esta situación, proponiendo un candidato tras otro hasta que el resultado de la segunda vuelta electoral (es prácticamente seguro que habrá una segunda vuelta) arroje luz sobre el rumbo de la política en este país.

Lo cierto es que el tiempo corre a su favor, pues a través del Gabinete de Emil Boc, que se mantiene en funciones en tanto no se resuelva la crisis, con la mitad de los ministros de la antigua coalición (todos del PDL), sigue conservando el poder ejecutivo y, sobre todo, la cartera de Interior. A finales del mes de octubre intentó alguna maniobra para atraerse al PNL y romper así la mayoría parlamentaria. Pero este Partido, que ya fue su socio en otra coalición que acabo igualmente mal en la legislatura anterior, también presenta a su propio candidato a las presidenciales y no está dispuesto a aceptar acuerdos prematuros. Incluso la "minusvalía" del Gabinete Boc y su incapacidad de promover las reformas acordadas con el FMI le favorece, pues le ahorra la impopularidad de su aplicación. Los sindicatos ya han desactivado las protestas que hace un mes movilizaron a cerca de 800.000 empleados públicos a la espera de tener un interlocutor con quien poder discutir.

El PSD, por su parte, ha acabado encontrándose mucho más cómodo como parte de la oposición mayoritaria, que cuando estaba en el Gobierno y tenía que afrontar las iras de la opinión pública y de los interlocutores sociales por tener que imponer las reformas impopulares a que le obligaba la estrategia de la coalición, en la que sólo el PDL cosechaba los éxitos de las relaciones económicas internacionales. Algunos comentaristas se han preguntado si en el fondo, las declaraciones de Dan Nica, que desencadenaron la crisis, no fueron en parte provocadas para salir de una situación cada vez más insostenible.

En cualquier caso, no parece que nadie vaya a variar el rumbo de su estrategia y no habrá más remedio que esperar hasta después del 6 de diciembre para saber quien tiene el poder en Rumanía.

El único problema viene dado por la situación económica. En su reciente visita a Bucarest, la Delegación del FMI ha reconocido que el Gobierno de Rumanía estaba cumpliendo con las condiciones básicas exigidas como contrapartida del préstamo. Sin embargo, el paquete legislativo de reforma del Sector público aprobado por el Gobierno Boc por el procedimiento de urgencia (sólo uno de los proyectos, el de la Ley de Pensiones no pudo ser tramitado antes de la moción de censura) no puede aplicarse. Esto se debe a que, por una parte, el Tribunal Constitucional, que ha admitido un recurso de constitucionalidad contra dicho paquete, ha decidido no pronunciarse hasta después del 6 de diciembre y, por otra, porque el propio Gobierno no tiene capacidad para presentar proyectos al Parlamento ni mucho menos tramitarlos por el procedimiento de urgencia, debido a su condición de Gobierno interino. Como tampoco tiene capacidad para presentar los nuevos presupuestos, que es la condición mínima exigida por el FMI para seguir desembolsando las remesas prometidas.

Los analistas ya se percataron de que muy poco tenía que ofrecer el Gobierno a la Delegación del FMI cuando tras cierta vacilación aceptó finalmente venir a Rumanía para su misión de control en octubre. Tan sólo que Rumanía había cumplido hasta ahora todas las condiciones y la promesa de que las seguiría cumpliendo en cuanto tuviese un gobierno con poderes para poder hacerlo. De haber prosperado este argumento, la maniobra de Basescu habría sido completa, pues la situación no sólo le habría permitido seguir controlando el poder ejecutivo a través del gobierno interino, sino también en virtud de esa misma deficiencia del Gabinete Boc, justificar la imposibilidad de proseguir con las reformas, ahorrándose de paso la impopularidad de la opinión pública por su aplicación. Pero el FMI ha preferido esperar y ha anunciado que sólo libraré la siguiente remesa de fondos una vez que haya un gobierno capaz de presentar un presupuesto para el 2010 con no más de un

5,9% de déficit y que pueda garantizarlo impulsando las reformas necesarias. El Jefe de la Delegación, J. Franks, declaró al abandonar Bucarest que no es posible volver a negociar los acuerdos, y que la única solución para cumplir los márgenes de déficit es suprimir gastos, “porque cuando uno no puede apretarse más el cinturón sin riesgo de que éste se rompa; la solución sólo puede ser la de ponerse a dieta”.

MEDIDAS ANTICRISIS Y MERCADO DE TRABAJO

Medidas adoptadas por el Gobierno rumano para luchar contra la crisis económica.

El gobierno de coalición surgido tras las elecciones de finales del 2008, adoptó el lema “Gobierno contra la crisis económica” En este sentido, en el momento de aprobar el Presupuesto del Estado para el 2009, lanzó un mensaje en el que cifraba los objetivos presupuestarios en los siguientes puntos, destinados a mejorar la situación económica y favorecer la creación de empleo.

- Destinar un 20% del Presupuesto del 2009 a inversión pública en infraestructura (transporte, medio ambiente, sanidad, rehabilitación térmica de las viviendas, educación, canalización de aguas...)
- Pago de las deudas a corto plazo contraídas por el gobierno anterior.
- Crecimiento del grado de absorción de los fondos europeos y seguimiento del mismo mediante la creación de un Comité interministerial de control semanal del progreso de absorción
- Agilización de la actividad administrativa y eliminación de la burocracia.
- Incremento de las reservas de las instituciones crediticias oficiales (750 millones de euros) Cek Bank y Exinbank, para apoyo a las PYMES
- Creación de un Fondo de garantía para créditos a las PYMES.
- Al presentar el programa de Gobierno de la coalición, en febrero del 2009, el Gobierno publicó una serie de medidas que se resumen a continuación.

Medidas para estimular la Economía.

- Dotación de ayudas de Estado a las PYMES en dificultad como consecuencia de la crisis económica.
- Destinar fondos a promocionar las exportaciones.
- Dotación de créditos para la renovación de viviendas y edificios.

- Exención fiscal del beneficio cuando sea destinado a reinversión.
- Utilizar las cláusulas de los contratos comerciales tipo Off-set para realizar inversiones y medidas suplementarias para el desarrollo de la industria alimentaria en el medio rural.
- Exención del IRPF del primer tramo de ingresos mensuales de 1.000 lei (240 euros) a menores de 30 años.
- En el sector de la construcción, sustituir la garantía económica que deben prestar las empresas por ejecución de obra, por una garantía bancaria.
- Creación de un Fondo de Inversiones, con participación del Estado, destinado a sociedades comerciales que elaboren proyectos de interés nacional.
- Desarrollo de un Proyecto nacional de protección del Medio Ambiente e irrigación para mejorar la capacidad del Sector Agrícola.
- Promoción de proyectos en cumplimiento de la Estrategia de Lisboa para promover la investigación y la innovación, desarrollo de parques científicos y tecnológicos, medidas de promoción de la investigación y mejora del sector informático.
- Ampliación del programa “RABLA”, (de fomento a la sustitución de automóviles usados) a tractores y vehículos agrícolas.
- Ampliación del programa “RABLA a personas jurídicas, incluyendo automóviles con más de dos años de antigüedad. Financiación total de 60.000 automóviles (20.000 más que en el 2008).
- Incrementar el capital social del Fondo de garantía del crédito rural, orientado a inversiones en agricultura e industria alimentaria en el medio rural.
- Modificación de la Ley de inversiones reduciendo el límite para su bonificación de 50.000 a 10.000 euros.

Medidas para incrementar los ingresos del Estado

- Incremento de los derechos a percibir por el Estado por contaminación del Medio Ambiente.
- Venta de las participaciones del Estado en AVAS y OSPIS (Activos financieros en manos del Estado) y otras instituciones de la Administración Pública.

- Venta de terrenos propiedad de los Ayuntamientos en los que se hayan construido edificios residenciales de titularidad privada.
- Introducción de la tributación “forfait” en actividades donde la evasión fiscal sea difícil de valorar, reemplazando el régimen de tributación mínima.
- Ampliación de la base impositiva en el Sector agrícola por la producción destinada al mercado de consumo.
- Urgir la aprobación de la Ley del Partenariado público-privado de acuerdo con la Legislación europea.
- Incremento de los derechos del Estado por la explotación de recursos naturales no renovables.
- Incremento de ingresos del Estado por beneficios “winfall profits”.
- Incremento de ingresos por tasas por consumo de carburantes en gasolineras.

Medidas para reducir los gastos del Estado

- Reestructuración de la Autoridad Nacional de la Administración Fiscal.
- Adopción de una Ley de Responsabilidad fiscal.
- Modificación de la normativa sobre retribuciones del Sector Público, introduciendo el criterio de coste del servicio.
- Mejora del procedimiento de control financiero y Auditoría interna en el Sector público.
- Reestructuración y profesionalización de las Autoridades de Administración y de los organismos intermediarios de gestión de los Fondos europeos.
- Racionalización del cuadro de obligaciones presupuestarias de los agentes económicos.

Medidas para incremento de la liquidez monetaria en el sector bancario

- Exención temporal del Impuesto sobre el interés de los depósitos realizados por las personas físicas.
-
- Priorizar la deuda externa en eurobonos entre el total de la Deuda pública.

En el mes de marzo del 2009, el Gobierno resolvió solicitar un préstamo de casi 20.000 millones de euros al FMI y otras instituciones internacionales de crédito. La concesión de dicho préstamo supuso un compromiso por parte del gobierno en llevar a cabo medidas de carácter inmediato y también estructural destinadas a contener el déficit público. Para ello, se comprometió a no incrementar el déficit en un porcentaje del PIB superior al 4,2% y a un paquete de medidas legislativas de reforma del Sector público:

- Ley General de Retribuciones de los empleados del Sector Público
- Ley de Reforma del Sistema educativo, incluyendo el sistema retributivo de los profesores
- Ley de reestructuración de las Agencias estatales
- Ley de Pensiones

Para paliar los efectos de estas reformas, el Gobierno lanzó otra serie de medidas de apoyo a los sectores más desfavorecidos.

- Ayuda social extraordinaria de 350 lei (83 euros) pagada dos veces al año para personas con ingresos no superiores a 300 lei (70 euros) mensuales. Se calcula que más de un millón de personas se han visto afectadas por esta medida.
- Bonificación en un 90% del coste de medicamentos a personas con ingresos no superiores a 600 lei mensuales (140 euros).
- Moratoria de tres meses del pago de costes sociales a los beneficiarios del seguro de desempleo.
- Subvención del 50% del coste de la Formación Profesional de los empleados de las empresas y de los trabajadores en paro.

En agosto del 2009, el FMI hubo de revisar las previsiones de marzo, acordando elevar el déficit permitido hasta un 7,3%, permitiendo asimismo que una parte del dinero prestado se dedique también a financiar el déficit del Estado, lo que quiere decir al pago de salarios y pensiones públicas.

El FMI, asimismo, revisó las previsiones macroeconómicas más significativas, como la del desempleo, que se prevé de un 9,6% para el conjunto del año 2009. asimismo, prevé que para el 2010, la tasa de pobreza aumentará del 5,7% al 7,4%, disparada por el aumento del desempleo y por la disminución de las remesas de los rumanos que trabajan en el extranjero. En 2009, el 43% de los rumanos pobres son niños con edades comprendidas entre los 0 y 14 años. La mayoría de los rumanos pobres viven además en el área rural.

Otras medidas extraordinarias para paliar la crisis.

- Adaptación del Programa Nacional de Reforma 2007-2010, elaborado al objeto de aplicar en Rumanía las conclusiones de la Cumbre de Lisboa, contiene un capítulo dedicado a la Reforma del Mercado de trabajo.
- Adaptación de la Estrategia a corto y medio plazo para la Formación Profesional continua (2005-2010)
- Programa de fomento de adquisición de viviendas “Primera Casa”. Este programa, que se ha comenzado a desarrollar a partir de marzo del 2009, tiene como objetivo impulsar la construcción y adquisición de viviendas por los particulares. Crea un Fondo de Garantía que cubre el 90% del capital hipotecado para la adquisición de viviendas con un precio máximo de 65.000 euros, y un adelanto por el comprador que no supere el 5% del valor hipotecado.
- Proyectos en el ámbito del FSE. En este ámbito, el Gobierno ha presentado un proyecto cofinanciado por importe de 133 millones de euros de apoyo al empleo para sectores con dificultades de acceso al mismo. Se definen como tales desempleados de larga duración (entre 6 meses y 2 años) aquellos cuyo salario sea el único ingreso de la unidad familiar, mayores de 50 años o de la Comunidad Romá. El proyecto se ha distribuido en tres partes: 56 millones para fomento del empleo, para subvencionar a empresas que contraten a trabajadores calificados como beneficiarios (de los que 29 millones de euros se destinan para trabajadores que provengan del medio rural). 52 millones para Formación Profesional y 25 millones para acciones dentro del ámbito de seguridad e higiene en el trabajo.
- Por último, dentro del ámbito del FSE, conviene mencionar los ejes prioritarios de financiación relacionados con el Mercado de Trabajo:
 - Eje prioritario 2: Formación continua durante toda la vida laboral
 - Eje prioritario 3: Incremento de la capacidad de adaptación de trabajadores y empresas.
 - Eje prioritario 4: Modernización del Servicio Público de Empleo.
 - Eje prioritario 5: Promoción de medidas activas de Empleo.
 - Eje prioritario 6: Promoción de la Inclusión social

La gestión del mercado de trabajo

El Mercado de Trabajo se gestiona a través de una institución, la ANOFM (Servicio Público de Empleo), dependiente orgánicamente del Ministerio de Trabajo, Familia y Protección Social. Esta institución ejerce sus

funciones de manera centralizada, aunque dispone de una Delegación en cada una de las provincias (Judetz) que son las que llevan a cabo la gestión ejecutiva efectiva del Mercado de Trabajo. La ANOFM, cuyo Presidente tiene rango de Secretario de Estado, es un órgano tripartito, en el que están representados los interlocutores sociales a través de un Consejo de Administración.

Entre las atribuciones de la ANOFM, se encuentran la del mantenimiento de una bolsa de trabajo y una base de datos de demandantes de empleo. También se le atribuye la administración del Seguro de desempleo y la organización de la Formación Profesional ocupacional.

Las ETTs están reguladas por el Código de Trabajo y otras disposiciones normativas específicas. En general, tienen un régimen similar al de los demás países europeos, en particular a aquellos que regularon las ETT a partir de los años 80. (España, Italia y Portugal). La regulación rumana sigue de cerca la tendencia de estos países. Se basa en las recomendaciones de la OIT, y sólo permite la cesión temporal de trabajadores, habiéndose desmarcado en este sentido de la regulación italiana. Se exige asimismo el requisito de autorización, preciso para actuar como agencia de trabajo temporal, debiendo también figurar en un registro especial.

Una diferenciación esencial entre Rumanía y otros Estados, no vendrá, pues por la regulación jurídica de esta forma de empleo, sino más bien por la regulación colectiva del mismo, debido a la escasa incidencia sindical, la inexistencia de una patronal organizada del sector y lo incipiente del diálogo social y la negociación colectiva sectorial en este país.

A pesar de ello, el porcentaje de penetración en el mercado laboral está creciendo sin cesar, pudiendo representar un porcentaje del 0,5%, por debajo de la tasa entre el 1 y 2% característica de la media europea, y centrada casi mayoritariamente en el Sector de los servicios.